Diciembre 2021

Señores

Convencionales Constituyentes

Presente

En mi calidad de abogado, contador, post graduado y Magister en Derecho con mención en Derecho Económico, más varios cursos del área legal, económica y financiera realizados en Chile y en el extranjero, y apelando también a mi vocación gremial, como ex director de la OTIC del Comercio, y Presidente de la Comisión Tributaria de la CNC y miembro de la misma comisión pero de la CPC, solicité comparecer a la Convención de Derechos Constitucionales.

Mediante correo de fecha 21 de diciembre se me indicó y expresamente que no era posible mi asistencia, por lo copada que está la agenda. Sin embargo, y en la misma misiva, me indicaron y también expresamente que la vocación democrática que preside a los constituyentes hace necesario que lo que quería plantear, pueda igual hacerlo mediante un documento que comprometieron circular entre todos ustedes.

Bien, asumiendo que honrarán la palabra empeñada, y que efectivamente quieren escuchar la opinión de todos los ciudadanos, para que lo que se construya como norma fundamental responda como han dicho, a lo que es mejor para el país, me permito plantear lo que nuestra Constitución debe incluir, considerando especialmente nuestra experiencia, el derecho comparado, y lo que resulta en mi opinión lo mejor para nuestro país. Procuré hacerlo de un modo pedagógico, refiriendo primero los principios basales y luego los preceptos constitucionales que sugiero incluir, describiendo en su título las normas de cada uno de ellos.

I.- PRINCIPIOS BASALES

I.1.-

Dignifiquemos al individuo. Aprovechemos la discusión constitucional para incorporar como lo hace Suiza un artículo que declare expresamente que “La dignidad humana debe ser respetada y protegida”.

Pero no nos quedemos con eso, vayamos más allá y establezcamos también como lo hace ese país el derecho a ser auxiliado cuando se está en situación de desamparo. Dice la norma, que “Aquél que se encuentre en una situación de desamparo y no pueda asumir su manutención, tiene derecho a ser auxiliado y asistido, y de recibir los medios indispensables para llevar una existencia digna de su condición humana”.

Tan importante es la dignidad que la Constitución de Portugal declara que su país es una República soberana que se basa en la dignidad de la persona. Por lo mismo, todos sus ciudadanos tienen según la misma norma fundamental la misma dignidad social. En Rusia, junto con establecerse que la dignidad del individuo está defendida por el Estado, se precisa que no puede existir ningún fundamento para menospreciarla.

I.2.

Reestablezcamos el orden, la paz social y el respeto por los derechos ajenos. No permitamos que grupos, sea que estén organizados o no, recurran impunemente a la violencia para lograr sus propósitos.

Nadie en sus cabales puede discutir u oponerse a que los ciudadanos se expresen y/o manifiesten individual y/o colectivamente. Lo que molesta es que estas manifestaciones pacíficas muten y transformen la ciudad en un campo de batalla. Enrabria que se aprovechen de ella los delincuentes para saquear y destruir la propiedad pública o privada, y que algunas fuerzas políticas en vez de denunciar este pillaje, vociferen contra las fuerzas policiales que cumplen con la función constitucional de resguardar el orden.

La Constitución debiera reconocer y explícitamente que en democracia los derechos humanos no sólo pueden violentarlo los agentes del Estado, sino que también y especialmente aquellos individuos que se organizan para obrar con violencia en contra de quienes disienten de ellos, sea dañando su propiedad, coartando su libertad o enfrentando con violencia a las fuerzas policiales.

El orden y la paz social resultan esenciales en cualquier país, sea democrático o no. En la República Popular China se declara que los ciudadanos deben observar el orden público y respetar la ética pública. En Noruega se consigna que el Gobierno está autorizado para desplegar las fuerzas militares contra sus propios ciudadanos, cuando éstos, pese a ser advertidos tres veces, insisten en perturbar la paz pública.

En Estados Unidos hasta el Presidente corre riesgos de ser perseguido penalmente, cuando por medio de sus discursos alienta o promueve la insubordinación. Las reglas como puede fácilmente advertirse existen para ser cumplidas. Si no lo son, deben aplicarse coactivamente.

Esto que me parece el ABC, debe reforzarse en la Constitución, porque la que existe no permite al poder político hacer cumplir la ley. Existe de hecho una zona geográfica que está literalmente tomada por un grupo de individuos que se asumen distinto al resto de los chilenos, en circunstancia que casi toda la población chilena tiene la misma sangre. Lo que puede haber son apellidos mapuches, no lo discuto, pero la

sangre araucana recorre sin dudar, las venas de casi todos los chilenos. Acá hubo un mestizaje, que no existió en América del norte.

I.3.-

Pongamos la libertad como eje.

La esencia es precedida por la existencia. No es al revés. Es el hombre quien con sus decisiones, determina lo que es. Por eso es tan relevante la libertad. No sólo económica sino que en todos los ámbitos.

Son los hombres los que deben elegir y son ellos también los que deben hacerse cargo de lo que decidan. No es función del Estado decidir. Su rol es garantizar que las decisiones se adopten en libertad.

II.- PROPUESTAS CONSTITUCIONALES:

II.1.-

Extensión e interpretación de los Derechos fundamentales¹

1. La libertad consiste en ser capaz de hacer cualquier cosa que no dañe a otros.
2. La Ley tiene el derecho de prohibir solamente aquellas acciones que son perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser obstaculizado, y nadie puede ser obligado a hacer lo que la Ley no ordena.
3. Las autoridades del Estado requieren una justificación legal para invadir los espacios de los individuos.
4. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes y de las normas aplicables de Derecho Internacional.

¹ Artículos 16 Portugal, 19 Alemania, Francia (Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, 4, 5, 113 Noruega, 3 Países Bajos)

5. Los preceptos constitucionales y legales, relativos a los derechos fundamentales deberán ser interpretados en armonía con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

6. Los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas.

7. Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la vía será la de los tribunales ordinarios.

8. Constituye obligación de la Republica suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los ciudadanos en la organización política, económica y social del país.

9.- Se considera que los derechos humanos que la Carta Fundamental consagra, se violentan o vulneran, tanto cuando la acción o omisión que los afecta reconoce su origen en un agente del estado, como cuando provienen de la acción de otras personas que conforman un grupo, sea que esté o no organizado, y sea que obedezca o no a un patrón ideológico.

10.- En este último caso, esto es, si existe una organización no gubernamental, un partido político o una entidad jurídica que los patrocina en redes sociales, o los financia, habrá acción civil indemnizatoria que podrá demandar en representación del colectivo social, **el Defensor del Pueblo**², persiguiendo la responsabilidad

² Sugiero incluir este órgano como una entidad supranacional, que subordine a la actual Contraloría General de la República, al INDH, al Defensor del Contribuyente y a la Defensoría Penal Pública.

patrimonial en bienes presentes o futuros tanto de las personas que los dirigen como de las organizaciones que los avalan o promueven.

11.- La misma acción podrá ejercerse contra el Estado, en caso que sin que medie disturbio o provocación, ejerza la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente.

II.2.-

Alcance jurídico de los preceptos constitucionales³.

1. Los preceptos Constitucionales, relativos a los derechos, Libertades y garantías son directamente aplicables y vinculantes respecto de las personas y órganos públicos y privados.

2. Los derechos fundamentales deben ser respetados en el conjunto del Orden Jurídico.

3 Aquel que realice cualquier actividad estatal estará obligado a respetar los derechos fundamentales y a contribuir a su realización.

4. Las autoridades velarán para que los derechos fundamentales siempre que se presten a ello, también se respeten en las relaciones entre particulares.

5. La ley sólo podrá restringir los derechos, libertades y garantías en los casos expresamente previstos en la Constitución, y tales restricciones se limitarán a los necesarios para salvaguardar otros derechos e intereses protegidos por la Constitución.

6. Las leyes restrictivas de los derechos, libertades y garantías, tendrán carácter general y abstracto, y no podrán tener efecto retroactivo ni restringir la extensión y el alcance del contenido esencial de los preceptos constitucionales.

³ Artículos 3 18 Portugal, 25 España, 35 ss. Suiza.

7.- El Estado orientará sus políticas para dignificar a sus ciudadanos, y orientará sus esfuerzos a la promoción y acrecentamiento del bienestar y la seguridad social y la salud pública.

8.- Toda restricción de un derecho fundamental necesita en una base legal. Las restricciones graves deberán estar previstas por una ley.

9. Toda restricción de un derecho fundamental deberá estar justificada por un interés público o por la protección del derecho fundamental de un tercero.

10. Toda restricción de un derecho fundamental deberá ser proporcional a su fin.

11. La esencia de los derechos fundamentales es inviolable.

II.3.-

Misiones prioritarias del Estado⁴

Incumbe prioritariamente al Estado en el ámbito económico y social:

1. Promover el aumento del bienestar social y económico y la calidad de vida de las personas, en especial de las más desfavorecidas, en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible;

2. Promover la justicia social, asegurar la igualdad de oportunidades y llevar a cabo las correcciones necesarias de las desigualdades en la distribución de la riqueza y de los ingresos principalmente a través de la política fiscal.

3. Asegurar la plena utilización de las fuerzas productivas, particularmente, velando por la eficiencia del sector público.

4. Promover la cohesión económica y social de todo el territorio nacional, orientando el desarrollo en el sentido de un crecimiento equilibrado de todos los sectores o regiones y eliminado progresivamente las

⁴ Basado en la Constitución de Portugal.

diferencias económicas y sociales entre la ciudad y el campo y entre el litoral y el interior.

5. Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, de modo que se garantice una equilibrada concurrencia entre las empresas, contra las formas de organización monopolísticas y reprimir los abusos de posición dominante y otras prácticas lesivas del interés general.

6. Desarrollar las relaciones económicas con todos los países, salvaguardando siempre la independencia nacional y los intereses de los chilenos y de la economía del país;

7. Garantizar la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores

8. Adoptar una política nacional de energía que preserve los recursos naturales y el equilibrio ecológico, promoviendo en este campo la cooperación internacional

9. Adoptar una política del agua con aprovechamiento, planificación y gestión racional de los recursos hídricos.

II.4.- Derechos sociales:

II.4.1.-

Derecho y protección del trabajo⁵

1. Es deber del Estado promover políticas de pleno empleo, favoreciendo el emprendimiento privado para que aumente la contratación.

2.- Todas las personas tienen derecho, con arreglo a la ley, a procurar su sustento mediante el trabajo, la profesión o la actividad que elijan.

⁵ Artículos 58, 59 Portugal, 36 Italia 46 ss., Rusia 27, 37, 43, 44, 45 China, España 36, 37, Finlandia 18, Países Bajos 37 ss., Italia 46, Rusia 27 y ss.

3. Todo ciudadano incapaz de trabajar y desprovisto de los medios necesarios para vivir tendrá derecho al mantenimiento y a la asistencia social.

4. Todos los trabajadores, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, religión o ideología, tendrán derecho:

a. A la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza, y calidad del mismo, con observancia del principio a trabajo igual, salario igual, de tal forma que garantice la existencia digna; b. A una organización del trabajo en condiciones socialmente dignas, que faciliten la realización de la persona y hagan posible la conciliación de la vida profesional y familiar; c. A la prestación del trabajo en condiciones de higiene, seguridad y salud; d. Al descanso y al ocio, a un límite máximo de la jornada de trabajo, al descanso semanal y a las vacaciones periódicas pagadas. e. A la asistencia material cuando el trabajador se encuentre involuntariamente desempleado. f. A la asistencia y adecuada reparación cuando el trabajador es víctima de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

5. Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, retribución y reposo a que tienen derecho los trabajadores, especialmente:

a. El establecimiento y la actualización del salario mínimo nacional, teniendo en consideración, entre otros factores, las necesidades de los trabajadores, el aumento del coste de la vida, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las exigencias de la estabilidad económica y financiera y la acumulación para el desarrollo.

b. La fijación de un horario nacional de trabajo.

c. La protección especial del trabajo de las mujeres durante el embarazo y después del parto, así como del trabajo de los menores, de los que tengan mermadas sus facultades y de los que

desempeñen actividades especialmente violentas o en condiciones insalubres, tóxicas o peligrosas.

d. En cooperación con las organizaciones sociales asegurar el desarrollo sistemático de una red de centros de descanso.

e. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores emigrantes y garantizar sus beneficios sociales.

f. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores estudiantes.

6. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

7. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

8. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

9. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

10.- Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

11.- Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

II.4.2.-

Derecho a la seguridad social⁶

1. Todos tienen derecho a la Seguridad Social.
2. El sistema de Seguridad Social protege a los ciudadanos en la enfermedad, vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.
3. Es responsabilidad del Estado exigir que el trabajador en todo el tiempo que trabaje contribuya, en los términos de la ley, para el cálculo de sus pensiones de vejez e invalidez, independientemente del sector de actividad en el que se haya desempeñado, e incluso si lo ha hecho en forma independiente.
4. Todas las personas que no puedan procurarse la seguridad inherente a una vida digna tienen derecho al sustento y a la atención imprescindibles.

II.4.3.-

Salud⁷

1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla.
2. El derecho a la protección de la salud, se realiza:

⁶ Artículo 19 Portugal.

⁷ Artículo 64 Portugal.

a. Por entidades privadas, elegidas libremente por el ciudadano, que las costeará directamente y según el plan que contrate.

b.- Por medio de un servicio nacional de salud universal y general que, atenderá con subsidio y hasta gratuitamente a quienes no estén adscritos a entidades privadas.

b. Mediante la creación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales que garanticen específicamente la protección de la infancia, la juventud y la vejez, y por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la cultura física y deportiva, escolar y popular y también por el desarrollo de la educación sanitaria del pueblo y por las prácticas de vida saludable.

3. Para asegurar el derecho a la protección de la salud, incumbe prioritariamente al Estado:

a. Promover políticas preventivas, que serán universales, y financiadas en la proporción correspondiente, según el número de usuarios que estén adscritos, por las entidades privadas que existan.

b. Promover políticas que eviten el uso o consumo de artículos que hagan daño a la salud, bajo el formato de imponerle un tributo especial a todas aquellas actividades que directa o indirectamente provoquen daño físico presente o futuro a los ciudadanos.

c. Los recursos que el Estado obtenga por el concepto anterior, deberá destinarlo al sistema de salud universal y subsidiado que exista.

d. Disciplinar y controlar las formas empresariales privadas de medicina, articulándolas por el Servicio Nacional de Salud, como forma de asegurar en las instituciones de salud tanto públicas como privadas, patrones adecuados de eficiencia y de calidad.

- e. Disciplinar y controlar la producción, distribución, comercialización y uso de los productos químicos, biológicos y farmacéuticos y otros medios de tratamiento y diagnóstico.
- f. Establecer políticas de prevención de tratamiento de la tóxico-dependencia.

II.4.4.

Vivienda y urbanismo

1. El Estado promoverá políticas orientadas a que todos los ciudadanos tengan derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que preserve la intimidad personal y la privacidad familiar.
2. Le corresponderá al Estado:
 - a. Programar y llevar a cabo una política de vivienda inserta en planes de ordenación general del territorio, y apoyada en planes de urbanización que garanticen la existencia de una red adecuada de transporte y equipamiento social.
 - b. Promover, en colaboración con las autoridades regionales y comunales, la construcción de viviendas sociales económicas.
 - c. Estimular la construcción privada, con subordinación a los intereses generales y el acceso a la vivienda propia o arrendada.
 - d. Incentivar y apoyar las iniciativas de las comunidades locales y de las poblaciones tendentes a resolver los respectivos problemas habitacionales, y a fomentar la creación de cooperativas de viviendas y de autoconstrucción.

II.4.5.

Medio ambiente y calidad de vida⁸

1. La responsabilidad por la naturaleza y su diversidad, por el medio ambiente y por el patrimonio cultural, pertenece a todos.
2. El poder público deberá procurar asegurar a todos el derecho a un medio ambiente saludable y la posibilidad de influir en la toma de decisiones que afecten a su hábitat.
3. Todos tienen derecho a un medio ambiente humano, salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo, adoptando medidas de prevención y preservación.
4. Para asegurar el derecho al medio ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible, incumbe al Estado, por medio de organismos propios con la vinculación y la participación de los ciudadanos:
 - a. Prevenir y controlar la polución y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión.
 - b. Ordenar y promover la ordenación del territorio, de manera que haya una correcta localización de las actividades, un desarrollo socio-económico equilibrado, y la protección del paisaje.
 - c. Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera que se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de interés histórico y artístico.
 - d. Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la

⁸ Artículos 66, Portugal, 20 Finlandia, Carta al Medio Ambiente 8 Francia, Noruega 112, Rusia 42, 58, Suiza 74)

estabilidad ecológica con respeto al principio de solidaridad entre generaciones;

e. Promover en colaboración con los gobiernos locales, la calidad medioambiental de las poblaciones y de la vida urbana, particularmente en el plano arquitectónico y en la protección de las zonas históricas.

f. Promover la integración de objetivos medioambientales en las diferentes políticas de ámbito sectorial;

g. Promover la educación medioambiental y el respeto por los valores del medio ambiente;

h. Asegurar que la política fiscal compatibilice el desarrollo con la protección del medio ambiente y la calidad de vida.

i. Informarle a los ciudadanos sobre el estado del entorno natural y sobre los efectos de cualquier invasión a la naturaleza que se planee o que haya comenzado.

5. Toda persona debe contribuir a la reparación de los daños que cause al medio ambiente en las condiciones definidas por la ley.

6. Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de precaución y en sus ámbitos de competencia, por la implantación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas provisionales, y proporcionadas con el fin de prevenir la producción del daño.

II.5.-

Emprendimiento, propiedad, impuestos.

En el marco de una política pro-emprendimiento se hace necesario que la Constitución:

1.- Incorpore como misión prioritaria del Estado, tal como lo hace Portugal y otros países:

a.- Promover el aumento del bienestar social y económico y la calidad de vida de las personas, en especial de las más desfavorecidas, en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible;

b.- Promover la justicia social, asegurar la igualdad de oportunidades y llevar a cabo las correcciones necesarias de las desigualdades en la distribución de la riqueza y de los ingresos principalmente a través de la política fiscal.

c.- Asegurar la plena utilización de las fuerzas productivas, particularmente, velando por la eficiencia del sector público.

d.- Promover la cohesión económica y social de todo el territorio nacional, orientando el desarrollo en el sentido de un crecimiento equilibrado de todos los sectores o regiones y eliminando progresivamente las diferencias económicas y sociales entre éstas.

e.- Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, de modo que se garantice una equilibrada concurrencia entre las empresas, contra las formas de organización monopolísticas y reprimir los abusos de posición dominante y otras prácticas lesivas del interés general.

f.- Garantizar la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores.

g.- Crear los instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para la planificación democrática del desarrollo económico y social.

h.- Asegurar una política científica y tecnológica favorable al desarrollo del país.

i.- Adoptar una política nacional de energía que preserve los recursos naturales y el equilibrio ecológico, promoviendo en este campo la cooperación internacional.

j.- Adoptar una política del agua con aprovechamiento, planificación y gestión racional de los recursos hídricos.

2.- Incorpore lo que España y Portugal denominan como derechos de los consumidores:

a. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

b. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

c. La publicidad será regulada por ley y todas las formas de publicidad indirecta, fraudulenta o encubierta serán prohibidas.

d. Las asociaciones de consumidores y cooperativas de consumo tendrán el derecho de conformidad con la Ley, a recibir apoyo del Estado y ser oídas en relación a las cuestiones de protección de los consumidores, y tendrán legitimación procesal para la defensa de los intereses de sus miembros o de cualquier interés general o colectivo.

e. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

3.- Reconozca en forma explícita el derecho de propiedad, el que constituye la meta del emprendedor, por lo que si ese derecho no está suficientemente garantizado no habrá un correlato con el emprendimiento. Así lo hacen todas las Constituciones (62 Portugal, 14 Alemania, 13 China, 73 Dinamarca, 43 Irlanda, 29 Japón, 33 España, 15 Finlandia, 17 Francia, 105 Noruega, 14 Países Bajos, 41, 42 Italia, 35 y 36 Rusia)

a. El Estado reconoce que el hombre, en virtud de su naturaleza racional, tiene el derecho natural, anterior al derecho positivo, a la propiedad privada sobre bienes corporales e incorporales.

b. De acuerdo con lo anterior, el derecho de poseer o retener propiedades es inviolable y el Estado garantiza que no aprobará ninguna ley que suprima el derecho a la propiedad privada o el derecho general a transferir, legar y heredar la propiedad.

c. El Estado reconoce, sin embargo, que el ejercicio de los derechos mencionados en las anteriores disposiciones de este artículo debe estar regulado, en la sociedad civil, por los principios del bien común.

d. Por consiguiente, el Estado puede limitar por ley el ejercicio de esos derechos con el fin de adaptar su ejercicio a las exigencias del bien común, según lo requieran las circunstancias.

e.- De este modo la expropiación está permitida sólo por razones de bien común. Podrá ser efectuada sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización. La indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados.

f. Los tribunales son competentes para determinar toda cuestión relativa a la legalidad del acto expropiatorio y al importe de la indemnización.

4.-

Establecer que la organización económica y social se asienta sobre los siguientes principios:

a. La libertad de iniciativa y de organización empresarial en el ámbito de una economía social de mercado.

b En base el principio que precede se garantiza la libre elección de la profesión, el libre acceso a una actividad económica lucrativa y la libertad de su ejercicio.

c. Los Trabajadores y empresarios así como sus organizaciones, tienen derecho de sindicarse para la defensa de sus intereses, de crear asociaciones y de adherirse o permanecer ajeno a ellas.

d. Los conflictos se solucionarán en la medida de lo posible mediante negociación o mediación.

e. La huelga y el cierre empresarial son lícitos siempre y cuando atañan a las relaciones laborales y no sean contrarias a las obligaciones acordadas y respeten aquellas de preservar la paz en el trabajo y de recurrir a una conciliación.

f. La Ley podrá prohibir la huelga a determinadas categorías de personas.

5.- Reconocer el rol de las empresas privadas como lo hace Portugal, (86) España (128 ss.) y Suiza (94).

a. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. La actividad de la empresa privada se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución y de la ley y con respeto al interés general.

b. El Estado incentiva la actividad empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y fiscaliza el cumplimiento de las respectivas obligaciones legales, en especial por parte de las empresas que persigan actividades de interés económico general.

c. El Estado sólo puede intervenir en la gestión de empresas privadas a título transitorio, en los casos expresamente previstos en la ley y, con el objeto de posteriormente licitarla o traspasarla a privados.

d.- El Estado mediante ley quórum calificado se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

e. La ley puede definir sectores básicos en los cuales se prohíba la actividad de las empresas privadas y otras entidades de igual naturaleza.

f.- Los poderes públicos atenderán a la modernización y estimularán los emprendimientos privados, estableciendo políticas crediticias y tributarias que los favorezcan.

g.- El Estado, con el apoyo del consejo consultivo económico podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

h.- La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

i. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

j. La ley regulará la actividad económica y las inversiones por parte de personas individuales o colectivas extranjeras, a fin de garantizar su contribución para el desarrollo del país y defender la independencia nacional y los intereses de los trabajadores.

k.- Los órganos que conforman el Estado deben:

k.a. Respetar el principio de la libertad económica.

k.b. Velar por salvaguardar los intereses de la economía nacional y contribuir a que los actores que participan en el mercado, lo hagan respetando los siguientes principios basales, que de vulnerarse deberán sancionarse con pena de multas equivalente al doble del beneficio indebido y con penas de presidio corporal.

k.c. Nadie está autorizado para coludirse con otros actores del mismo giro, para definir precios o condiciones de venta.

k.d. Nadie puede aprovechar su posición monopólica legal o de facto (menos de 3 actores como demandantes u oferentes) para establecer precios que excedan los márgenes propios de una economía competitiva.

k.e. Le corresponderá al Estado definir los monopolios legales y de facto y establecer los márgenes de beneficio máximo por industria. El Defensor del Pueblo deberá ser informado de este catastro, y tendrá derecho a objetarlo fundadamente en base la retroalimentación que reciba del colectivo social.

k.f. Evadir dolosamente impuestos bajo cualquiera de las infracciones que sanciona típicamente la ley impositiva.

k.g. Competir con ventajas en relación al comercio establecido: i. Utilizando plataformas virtuales sin pagar los impuestos correspondientes; ii. Recibiendo el pago de sus servicios mediante transferencias electrónicas no documentadas; iii. Vendiendo bienes o prestando servicios sin cumplir con las exigencias sanitarias, municipales y o ambientales; iv. Incumplir con las leyes laborales y/o previsionales.

k.h. Acceder y utilizar en beneficio propio o de un tercero relacionado directa o indirectamente, cualquier información financiera, bursátil o de la índole que sea para comprar bienes o servicios en base información que el resto de los competidores no tiene.

k.i. Comercializar o prestar servicios vulnerando el derecho de propiedad intelectual y/o industrial.

k.j. Obtener ventajas en licitaciones o subastas públicas y o privadas, en función de relaciones de amistad o de interés comercial presente o futuro con quienes elaboraron las bases o deciden en función de ellas.

k.k. Quienes administrando fondos de terceros deciden las políticas de inversión de dicho fondos en base principalmente intereses personales actuales o futuros.

6.- Establecer un Sistema fiscal que funcione – Portugal, Dinamarca 43, Alemania 105, 106, Irlanda 21, 22, España 31, Finlandia 71 ss., Francia 13, 14, Países Bajos 104, Italia 47), Rusia 55 y ss., Suecia, Capítulo IX. Art. 1. , Suiza art. 127 -.

a. El sistema fiscal aspira a satisfacer las necesidades financieras del Estado y de otras entidades públicas y a un reparto justo de los rendimientos y de las riquezas.

b. Los impuestos serán creados por ley, la que determinará el hecho gravado, su base imponible, la tasa, el sujeto del impuesto, su incidencia, porcentaje, los beneficios fiscales, demás elementos de la obligación tributaria y las garantías de los contribuyentes.

c. Nadie puede ser obligado a pagar impuestos que no hayan sido creados de acuerdo con la Constitución, que tengan naturaleza retroactiva o cuya liquidación y cobro no haya sido fijada en los términos de la ley.

d.- Todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad de pago mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad el que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

e. Salvo las excepciones contenidas en la ley sobre Impuesto Territorial, los impuestos que gravan las donaciones, y las patentes municipales, bajo condición en este último caso que la actividad se ejerza directamente por la sociedad dueña de las inversiones, se prohíbe la doble imposición y establecer tributos sobre el patrimonio.

f. Sólo pueden establecerse cargas públicas y/o tributos en sus diversas manifestaciones por medio o con arreglo a la ley.

g.- Los proyectos de ley de carácter financiero serán iniciados exclusivamente por el Presidente de la República o por el Senado.

h.- Todo proyecto de ley de carácter financiero promovido por el Senado será enviado al Presidente de la República para que este formule sus recomendaciones.

i.- Un proyecto de ley de carácter financiero es un proyecto de ley que contiene disposiciones relativas a todas o a algunas de las siguientes materias: establecimiento, derogación, condonación, modificación o alteración de tributos; la creación para el pago de

la deuda pública u otros propósitos financieros de cargas a cuenta de los fondos públicos, o la modificación o supresión de cualquiera de esas cargas; oferta monetaria; asignación, recibo, custodia, elaboración o auditoría de cuentas de fondos públicos; la emisión o la garantía de cualquier préstamo y la amortización de los mismos, así como las cuestiones subordinadas e incidentales a las citadas o a una cualquiera de ellas.

j.- El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

k.- Los fondos del Estado no podrán emplearse de modo distinto al acordado por el Parlamento.

l. El presupuesto fiscal debe ser equilibrado. Sin ingresos provenientes de créditos. Debe prever regulaciones para la toma en consideración, de forma simétrica en expansión y recesión, de los efectos de un desarrollo coyuntural divergente de la situación normal, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o de situaciones extraordinarias de emergencia, que se sustraen al control del Estado y que graven considerablemente la situación financiera estatal. Para la regulación de excepción debe preverse una regulación correspondiente de amortización.

m.- El endeudamiento del Estado debe basarse en un consentimiento del Parlamento, en el que deben expresarse los importes máximos del nuevo endeudamiento y de la deuda estatal. La garantía del Estado y el aval del Estado pueden concederse con el consentimiento del Parlamento.

n. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

ñ. La República estimulara y protegerá el ahorro en todas sus formas; disciplinara y coordinara el ejercicio del crédito, promoviendo su enseñanza en la educación primaria mediante cursos diseñados por Universidades e impartidos gratuitamente por alumnos que no hayan cumplido el servicio militar.

o. La República de Chile fomentará y favorecerá el acceso del ahorro popular a la propiedad de la vivienda, a la propiedad agraria directa y a la inversión accionaria directa e indirecta en los grandes complejos productivos del país, permitiéndole a los trabajadores canjear sus indemnizaciones legales, cuando registren 10 años de permanencia en un trabajo por una participación accionaria o societaria equivalente a esos derechos.

Sin otro particular, les saluda cordialmente;

Christian Aste M.